

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTES	MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO
EJECUTADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-014-2015-01711-01
TEMA	Auto que resuelve excepciones.
DECISIÓN	Revoca parcialmente.

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento escrito, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del

Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por la señora **MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 023**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Para lo que a esta decisión interesa, es preciso reseñar que la señora **MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO**, actuando a través de apoderada judicial, formuló demanda ejecutiva laboral contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que se libre **MANDAMIENTO DE PAGO** a su favor, por los siguientes conceptos:

“PRIMERO Por el capital, el cual esta compuesto por los valores fijados en la condena del proceso ordinario, relacionada con retroactivo por la reliquidación de la pensión de vejez; OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS M/L (\$86.691.017) LA INDEXACIÓN DE ESTA SUMA (que deberá ser tomado como IPC inicial el del 11 de agosto de 2005 e índice final el de la fecha en que se pague la obligación) Y LAS COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO DEL PROCESO, que suman un valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$21.672.000.00).

SEGUNDO; El reajuste correspondiente a las mesadas causadas desde la fecha del fallo hasta el momento del pago efectivo de la obligación y a futuro.

TERCERO: Condenar a la entidad demandada, al pago de las costas procesales del proceso ejecutivo, las cuales se deben de liquidar de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo 1887 de junio de 2003, emanado del Consejo Superior de la judicatura.

CUARTO: sobre los anteriores conceptos, valores, capitales insolutos o sumas adeudadas se deberán aplicar los respectivos intereses moratorios, ya sean:

**Los intereses moratorios, consagrados en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011 (en la forma prevista en los artículos 192 – 195) ó los intereses legales comerciales consagrados en los Artículos 883 y siguientes del Código de comercio y la ley 45 de 1990; cualquiera de ellos causados desde la ejecutoria del auto y/o sentencia que hace exigible la obligación, hasta que se verifique el pago total de la obligación o la liquidación del crédito.*

**Subsidiariamente los intereses legales consagrados en las normas civiles; causados desde la ejecutoria del auto y/o sentencia que hace exigible la obligación, hasta que se verifique el pago total de la obligación o la liquidación del crédito.”*

Como hechos relevantes, narró que a la ejecutante le fue reconocido judicialmente el derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, junto con la indexación de las condenas y las costas del proceso, y para garantizar el cumplimiento de la obligación impuesta, se radicó ante COLPENSIONES la cuenta de cobro correspondiente.

Sin embargo, la entidad accionada no ha dado cumplimiento a la sentencia ordinaria laboral y el auto que liquidó las costas procesales y agencias en derecho, providencias que constituyen el título ejecutivo en la presente litis, adeudado por concepto de retroactivo de reliquidación pensional la suma de \$86.691.017, su indexación, y las costas y agencias en derecho que fueron liquidadas en la suma de \$21.672.000, tardanza que ha dado lugar a la causación de los intereses moratorios previstos en los arts. 192 al 195 de la Ley 1437 de 2011, o en su defecto los intereses previstos en los arts. 883 y ss del Código de Comercio y la Ley 45 de 1990, o aquellos regulados en las normas civiles.

Mediante auto interlocutorio del 24 de noviembre de 2015, el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, accedió a librar

mandamiento de pago ejecutivo a favor de la señora MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO, por los siguientes conceptos:

**OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS (\$86.691.017). Por retroactivo de la reliquidación de la pensión de vejez, desde el 11 de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2010.*

**Mas la indexación que deberá de tomarse como IPC inicial el 11 de agosto de 2005 e índice final el de la fecha en que se pague la obligación.*

**Por el reajuste correspondiente a las mesadas causadas desde la fecha del fallo hasta el momento del pago efectivo de la obligación y a futuro.*

**Por el reajuste correspondiente a las mesadas causadas desde la fecha del fallo hasta el momento del pago efectivo de la obligación y a futuro.*

**Por valor de veintiún millones seiscientos setenta y dos mil pesos (\$21.672.000). Por concepto de costas procesales de primera instancia.*

**Mas los intereses moratorios legales del artículo 1617 del C. Civil, sobre el anterior concepto, generados desde el día 16 de febrero de 2012, fecha de ejecutoria del auto que las aprobó, y hasta el pago total.*

Negando el mandamiento en todo lo demás.

Efectuada la notificación correspondiente de fecha 9 de marzo de 2016, la entidad ejecutada presentó la contestación a la demanda, proponiendo como excepciones de mérito las que denominó: “*inexistencia de título ejecutivo frente a los intereses legales o moratorios del código civil; prescripción; compensación; y pago*”.

Y luego mediante memorial de fecha 5 de julio de 2016 (fls.78), la apoderada judicial de la entidad ejecutada, aporta copia de las resoluciones N° GNR-361553 del 17 de noviembre de 2015 y GNR-132906 del 4 de mayo de 2016, en las que supuestamente da cumplimiento total a las obligaciones y condenas impuestas, solicitando en consecuencia, se declare la prosperidad de la excepción de pago, y se ordene el levantamiento de las medidas cautelares.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE ALZADA:

En audiencia de resolución de excepciones, celebrada el 28 de febrero de 2019, la JUEZ CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, DECLARÓ no probados los medios exceptivos de prescripción, y compensación, y probada parcialmente la excepción de pago en favor de COLPENSIONES, y ORDENÓ seguir adelante con la ejecución de las siguientes sumas dinerarias:

- Por la suma de **\$8.187.977**, a título de saldo insoluto de la diferencia de las mesadas pensionales causadas entre el 01 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016
- Por la suma de **\$6.374.844** a título de saldo insoluto de indexación de la condena.
- Por la suma de **\$21.672.000** por concepto de costas liquidadas en el proceso ordinario.

Finalmente, impuso las costas del proceso ejecutivo a cargo de COLPENSIONES y a favor de la parte ejecutante, y por agencias en derecho, dispuso la suma equivalente al 10% de la obligación.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, si bien en un principio se había librado mandamiento de pago por los intereses legales del art. 1617 del CC, un nuevo estudio del proceso da lugar a declarar su improcedencia, lo anterior en virtud del control oficioso de legalidad al que alude el art. 132 del CGP.

También señaló la *A Quo* que en el sub lite no operó la prescripción de la acción, para el cobro coactivo de la sentencia ordinaria laboral, y que si bien está probado en el sub lite que, la entidad realizó el pago de las costas procesales por

valor de \$21.672.000, este pago fue extemporáneo (13-05-2016), al no haberse efectuado dentro del término de 5 días contados desde la notificación por aviso del auto que libró mandamiento de pago, término que vencía el 31 de marzo de 2016, advirtiéndolo la a quo, que la suma pagada extemporáneamente será tomada en cuenta en la subsiguiente etapa procesal de liquidación del crédito.

Manifestó la falladora de instancia, que los valores liquidados por la entidad ejecutada por concepto de reliquidación pensional e indexación de las condenas son deficitarios, ya que las sumas liquidadas por el despacho arrojan un mayor valor, según se aprecia en las tablas de liquidación obrantes a folios 117 al 122 del plenario.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por la apoderada judicial de la parte ejecutada, quien afirma que la entidad ya dio cumplimiento total a las obligaciones impuestas en el proceso ordinario laboral, lo anterior a través de las resoluciones N° GNR-361553 de 2015 y GNR-132906 de 2016, debiéndose declarar probada totalmente la excepción de pago.

También expone esta recurrente, que en el hipotético caso de no acogerse la tesis del pago total de la obligación, sí se declare el pago parcial sobre las costas procesales, por valor de \$21.672.000, pues esta suma dineraria fue pagada por la ejecutada de manera voluntaria, en los dos meses siguientes de haberse proferido el que libró mandamiento de pago, advirtiéndolo que de no declararse probada la excepción de pago sobre las costas procesales, las mismas tendrán una notable incidencia en la liquidación del crédito, en perjuicio de COLPENSIONES, y finalmente se indica en la alzada, que las costas procesales del ejecutivo deben ser reducidas al 5%.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la parte ejecutada, Dra. MARÍA CAMILA MESA MONTOYA portadora de la T.P. N° 217.094 del C.S de la J., presentó escrito de alegaciones, ratificando los mismos argumentos expuestos en el recurso de alzada. A la referida apoderada judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Desatará la Sala el recurso de alzada interpuesto, tomando en consideración los puntos de inconformismo que sustentan dicho recurso, al tratarse de una providencia judicial que al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del CPT y SS., es recurrible en apelación.

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe a desatar la apelación presentada por la parte ejecutada contrae el auto interlocutorio a través del cual se declaró parcialmente probada la excepción de pago en relación al mayor valor de las mesadas pensionales causadas entre el 01 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016, y el mayor valor de la indexación de la condenas, y se declaró no probada la excepción de pago frente a la condena en costas procesales.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, recordar que, en el proceso ejecutivo conexo, el grado de semejanza que debe existir entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución, es absoluta.

Tal exactitud funge como garantía de que la ejecución solo se adelantará por las obligaciones claras, expresas y exigibles que fueron impuestas en la sentencia resultante del proceso ordinario. Así, de un lado el título ejecutivo

funge como garantía crediticia para el acreedor, ya que el mismo incorpora los derechos precisos que pueden hacerse exigibles por la vía ejecutiva, sin que pueda interpretarse con alcance restringido lo esencialmente contenido en el mismo; y al mismo tiempo, este comporta garantía para el deudor, quien conforme a la incorporación precisa y exacta del derecho, no podrá ser perseguido en sus bienes y eventualmente ejecutado en un juicio, por ninguna obligación o importe que no contenga el propio documento.

Ello por cuanto, la fuerza de ejecutividad patrimonial del título ejecutivo (sentencia ordinaria) en contra del deudor (vencido en juicio en el proceso ordinario), no alcanza a comprender una nueva disputa de orden social.

Ir más allá de las obligaciones contenidas en la sentencia ordinaria, indudablemente significaría desbordar el alcance del crédito que contiene la providencia, y evidentemente ese ir mas allá situaría al sujeto de derechos en el escenario del proceso ordinario, y no del juicio ejecutivo.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el *“que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta”* (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

CASO CONCRETO

A efectos de establecer el monto de lo adeudado en este caso, resultante de las obligaciones impuestas por la Judicatura a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la Sala consultó las pretensiones reconocidas a la señora MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO en el título ejecutivo constituido por las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 19 de julio de 2010 y 3 de noviembre de 2011, visibles a folios 63 al 69 y 83 al 92 del cuaderno principal, así como los autos de liquidación y aprobación de costas procesales del 12 de diciembre de 2011 y el 14 de febrero de 2012, visibles a folios 93 y 94 del cuaderno principal.

Para tal efecto, la Sala transcribe a continuación el NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, así como la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia, que contiene las condenas por reliquidación pensional e indexación de las condenas:

Sentencia de primera instancia

“SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL ANTIOQUIA, a pagar a la señora María Eugenia Velásquez Toro, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 32.470.904, la suma de: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS (\$86.691.017,00), por concepto de retroactivo por la reliquidación de su pensión de vejez, desde el 11 de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2010.”

Sentencia de segunda instancia

“...MODIFICA el NUMERAL TERCERO de la providencia recurrida, en cuanto al extremo inicial del IPC con el cual debe calcularse la indexación de la condena impuesta en el numeral segundo de la providencia en cita, indicando que este IPC será el del 11 de Agosto de 2005, y como extremo final del IPC el del mes en que se pague la obligación, en todo lo demás se CONFIRMA la sentencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

Observa la Sala que la condena por indexación del mayor valor de la mesada pensional, fue delimitada únicamente en su extremo inicial 11 de agosto

de 2005, pues al desconocerse la fecha de pago del retroactivo adeudado, era imposible una liquidación en concreto de esta condena, lo que dio lugar a la orden en abstracto que como obligación de hacer le correspondía al ISS hoy COLPENSIONES.

En cumplimiento a lo ordenado en esta providencia, COLPENSIONES expidió la resolución N° GNR-132906 del 4 de mayo de 2016 en la que dispuso el pago de los siguientes conceptos:

*La suma de \$86.694.017 por concepto de retroactivo pensional (reliquidación) ordenada judicialmente por el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2005 y hasta el 31 de julio de 2010.

*La suma de \$113.135.310 por concepto de las diferencias de las mesadas ordinarias causadas desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016.

*La suma de \$9.683.768 por concepto de las diferencias de las mesadas adicionales causadas desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016.

*La suma de \$50.283.557 por concepto de indexación por las diferencias causadas desde el 11 de agosto de 2005 hasta el 30 de abril de 2016.

No obstante, la juez de primer grado estimó que lo liquidado por COLPENSIONES por concepto de las diferencias de las mesadas ordinarias y adicionales ($\$113.135.310 + \$9.683.768 = \$122.819.078$) desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016, era deficitario, pues lo realmente adeudado por este concepto era la suma de **\$131.007.055**, quedando así un saldo insoluto por pagar de \$8.187.977, suma sobre la cual ordenó continua con la ejecución.

Al verificar la Sala los cálculos aritméticos realizados por la *A Quo* para llegar a esta conclusión, visibles a folios 117 al 122 del plenario, se advierte un notorio error, que indudablemente influyó tanto en el mayor valor del retroactivo pensional por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2010 hasta el 30 de abril de 2016, como en la indexación de las condenas, y consistió en haber tenido

en cuenta para la liquidación, un total de **14 mesadas anuales** a favor de la ejecutante MARÍA EUGENIA VELÁSQUEZ TORO, a sabiendas que en la sentencia de primera instancia que constituye el título ejecutivo en la presente litis, no se indicó que la demandante tuviere derecho a la mesada 14 (junio), por el contrario, en la liquidación del retroactivo por mayor valor allí efectuado, visible a folios 67 (vuelto), es evidente que la suma de \$86.691.017, fue calculada teniendo en cuenta únicamente la mesada adicional de diciembre de cada anualidad.

Y es que no podía ser de otra manera, pues la actora causó su derecho pensional el día 11 de agosto de 2005, cuando arribó a la edad pensional de 55 años mujeres, es decir, en plena vigencia del acto legislativo 01 de 2005, reforma constitucional que como bien se sabe, suprimió el derecho a la mesada 14 a partir de su vigencia, exceptuando únicamente a aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, que no es el caso de la aquí ejecutante, pues su mesada pensional para la fecha de causación era de \$5.076.477.

El correcto cálculo del mayor valor de la mesada pensional y la indexación de las condenas, con las 13 mesadas anuales que le corresponden a la ejecutante, era efectivamente las sumas reconocidas por COLPENSIONES en la resolución N° GNR-132906 del 4 de mayo de 2016.

AÑO	IPC	MESADA PAGADA	MESADA DEBIDA DE PAGAR	DIFERENCIA	NUMERO DE MESADAS	SUBTOTAL
2010	3,17%	\$ 4.959.203	\$ 6.454.949	\$ 1.495.746	6	\$ 8.974.473
2011	3,73%	\$ 5.116.410	\$ 6.659.571	\$ 1.543.161	13	\$ 20.061.088
2012	2,44%	\$ 5.307.252	\$ 6.907.973	\$ 1.600.721	13	\$ 20.809.367
2013	1,94%	\$ 5.436.749	\$ 7.076.527	\$ 1.639.778	13	\$ 21.317.116
2014	3,66%	\$ 5.542.222	\$ 7.213.812	\$ 1.671.590	13	\$ 21.730.668
2015	6,77%	\$ 5.745.067	\$ 7.477.837	\$ 1.732.770	13	\$ 22.526.010
2016	5,75%	\$ 6.134.008	\$ 7.984.087	\$ 1.850.079	4	\$ 7.400.314
TOTAL						\$ 122.819.036

Así las cosas, serán acogidos los argumentos expuestos por la apoderada judicial de COLPENSIONES en su recurso de alzada, revocándose lo resuelto en este sentido, y en su lugar, declarar probada la excepción de pago propuesta en este sentido.

Costas procesales.

En relación con las costas procesales, la Sala mantendrá lo resuelto en este sentido, es decir, la improsperidad de la excepción de pago frente a esta obligación, pues como bien lo señaló la juez de primer grado, el pago de las costas procesales se realizó en forma extemporánea, el día 13 de mayo de 2016, es decir, por fuera del plazo de 5 días concedido, luego de haberse efectuado la notificación por aviso del auto que libró mandamiento de pago.

Y es que tal y como lo disponen los arts. 423 y 431 del Código General del Proceso, aplicables al procedimiento laboral y seguridad social, en virtud de la remisión normativa establecida en el art. 145 del CPTSS, la notificación del mandamiento ejecutivo hará las veces de requerimiento para constituir en mora al deudor, y si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, veamos:

“ARTÍCULO 423. REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA Y NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO. *La notificación del mandamiento ejecutivo hará las veces de requerimiento para constituir en mora al deudor, y de la notificación de la cesión del crédito cuando quien demande sea un cesionario. Los efectos de la mora sólo se producirán a partir de la notificación.”*

“ARTÍCULO 431. PAGO DE SUMAS DE DINERO. *Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda. Cuando se trate de obligaciones pactadas en moneda extranjera, cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada.*

(...)”.

Así las cosas, el pago extemporáneo en que incurrió la entidad ejecutada, no puede ser tenido en cuenta para convalidar la excepción formulada en este sentido, pero si será tenido en cuenta en la etapa subsiguiente de liquidación del crédito, como bien lo coligió la juez de primer grado, advirtiendo eso sí, que la fecha en que fueron consignadas estas costas procesales en la cuenta judicial del juzgado de origen, será tenida en cuenta como el extremo final de liquidación por cualquier concepto.

Finalmente, señala la Sala que no se realizará pronunciamiento alguno frente a la fijación de las agencias en derecho en este proceso ejecutivo laboral conexo, al no ser esta la oportunidad procesal correspondiente para controvertir el valor de las agencias en derecho fijadas por la *A Quo*, pues de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del art. 366 del Código General del Proceso, la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la prosperidad parcial del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, no habrá lugar a imponer costas procesales en esta instancia.

V. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, en cuanto ordenó continuar adelante con la ejecución por las sumas de: \$8.187.977 y \$6.374.844 por concepto de saldos insolutos derivados del mayor valor retroactivo de la mesada pensional entre el 01 de agosto de 2010

hasta el 30 de abril de 2016, y la indexación de las condenas, para en su lugar, DECLARAR probada la EXCEPCIÓN DE PAGO formulada por la apoderada judicial de la entidad ejecutada, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el todo lo demás el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Se ordena notificar lo resuelto en estados virtuales y la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **074** del **3 de mayo de 2021**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>